

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05266310500120150021001, promovido por la señora **YURI JHACSON TELLO PALACIOS** en contra de **CENTRO SUR SA Y CÉSAR EMILIO CORDOBA PALACIOS**, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por **CENTRO SUR S.A.** en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el día doce diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **081**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, se solicitó declarar que entre César Emilio Córdoba Palacios y el señor Yuri Jhacson Tello Palacios, existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido el cual terminó por causa imputable al empleador, teniendo este último contratación con Centro Sur S.A. y por ende, se declare a los demandados solidariamente responsables del pago de las acreencias laborales derivadas de la relación laboral, como cesantías causadas entre 16 de abril de 2012 al 21 de agosto del mismo año, vacaciones, prima, intereses a las cesantías, indemnización por despido injusto, salario de la última catorcena laborada, indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., indemnización por no entrega de dotación ni calzado de labor y costas del proceso.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se expuso, que el actor sostuvo una relación laboral con el señor César Emilio Córdoba Palacios, quien a su vez fue contratista de Centro Sur S.A., mediante un contrato laboral pactado verbalmente para desempeñar el oficio de pilero en la obra en construcción POLARIS CIELO SUR, iniciando labores el 16 de abril de 2012 siendo despedido el 21 de agosto del año 2012. Comentó que en sus funciones seguía las órdenes del señor César Emilio Córdoba Palacios y Centro Sur SA por intermedio de Juan Esteban Gaviria Muñoz quien era el ingeniero o por los maestros de obra, siendo la empresa quien suministraba las herramientas para el desempeño de la labor. Pactó una asignación salarial que se pagaría cada 14 días equivalente a \$45.000 por metro lineal escavado. \$5.000 por piedra extraída, \$100 por abombe en quema de minería teniendo como última asignación la suma de \$1.960.000.

Narró que la demandada Centro Sur S.A. fue quien supervisó la labor, y se benefició del servicio. Explicó que el señor César Emilio Córdoba citó a los trabajadores el 21 de agosto del año 2012 indicándoles una disminución en los precios que se habían pactado y que tampoco pagaría la extracción de piedras, lo que produjo un cese de actividades de los trabajadores, siendo retirados de la obra. Culminada la relación laboral, no se le pagó lo devengado entre el 13 y el 21 de agosto de 2012 ni las prestaciones sociales.

Admitida la demanda, y una vez notificadas, las accionadas dieron respuesta así

El señor César Emilio Córdoba Palacios, aceptó la existencia de la relación laboral, pero bajo un contrato por obra o labor determinada, el cual, se encontraba supeditado al contrato civil existente con Centro Sur, que fue suscrito el 9 de julio del año 2010 con el fin de ejecutar las excavaciones de pilas y actividades conexas en tres construcciones: Arboleda del Rodeo II, Sauces del Sur y Polaris Cielo Sur. Dicho contrato, se extendió hasta el 21 de agosto del año 2021 en la cual, el señor Juan Esteban Gaviria Muñoz (Centro Sur) terminó el contrato de obra civil. Negó la omisión de entrega de dotación informada por la parte actora, e informó que la terminación de la relación laboral se debió precisamente al fenecimiento del contrato por obra civil. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: *“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, “Inexistencia sustancial del derecho y consecuentemente falta o carencia de acción”, “Buena Fe”, “La Genérica”*.

La demandada Centro Sur S.A., explicó que no le consta los hechos narrados en el libelo gestor, pues no tuvo vinculación alguna con el demandante ni conocen si el señor César Emilio Córdoba Palacio la tuvo. Explicó que contrató al señor César Emilio Córdoba Palacios para los servicios especializados de mano de obra y excavación de pilas para la fundación, cuya ejecución, se encontraba bajo su propia dirección y responsabilidad, con sus propios recursos y herramientas. Negó que se dieran instrucciones u órdenes al demandante. Arguyó que deberá la parte actora probar en el proceso los elementos propios de la relación laboral, y resaltó que la excavación de pilas no es una labor de las normales de Centro Sur. Reiteró que no le consta la relación laboral que se pregona en la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, interponiendo las excepciones de: *“Falta de causa para demandar”, “Inexistencia de la relación laboral”, “Compensación”, “Prescripción2”, “Buena Fe de la accionada”, “Inexistencia de la solidaridad”*.

En sentencia del diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, condenó en forma solidaria al señor César Emilio Córdoba Palacio y a la empresa Centro Sur S.A. al pago de: cesantías,

intereses a las cesantías, vacaciones, primas, indemnización por despido injusto, sanción del artículo 65 del CST, este último desde el 22 de agosto del año 2012 y hasta el pago efectivo de los conceptos ordenados, al pago de salario, todo ello teniendo en cuenta el salario mínimo legal del año 2012, y se inhibió a hacer pronunciamiento respecto a las dotaciones de labor. Fundamentó su sentencia, en que el señor César Emilio Córdoba Palacio aceptó en la contestación de la demanda la existencia de la relación laboral con el demandante, relación que fue por obra o labor determinada. Respecto a la empresa Centro Sur, le impuso solidaridad conforme lo establecido en el artículo 34 del C.S.T. de acuerdo al contrato que lo unió con el señor César Emilio Córdoba Palacios como contratista, pues la excavación de pilas no se extrae del giro de los negocios de la empresa al ser necesaria para erigir una construcción. Sobre el despido, indicó que, en efecto, al no haber prueba de la terminación de la obra Polaris Cielo sur, y ante el desconocimiento de si el señor Córdoba Palacios se contrató por las tres obras o por una sola, se condenó al pago de quince (15) días de indemnización.

APELACIÓN

La apoderada de la parte accionada Centro Sur S.A. interpuso recurso de alzada solicitando se revoque la sentencia respecto a su prohijada y se absuelva de todas las pretensiones invocadas en su contra. Como fundamento de ello, indicó que en la sentencia no se tuvo en cuenta que el codemandado solicitó amparo de pobreza y tiene un interés claro en que sea Centro Sur el responsable de reconocer las acreencias ordenadas, pues no tiene con qué responder. Indicó que, los objetos sociales del señor César Emilio y Centro Sur son disímiles pues mientras el contratista hace pilas, la empresa diseña, comercializa, hace estudios de factibilidad de proyectos inmobiliarios, estudios económicos técnicos y financieros de proyectos inmobiliarios y si bien la labor de realizar las pilas implica la consecución de la labor concreta que lleva a cabo la empresa, no es única y exclusiva, por lo que no se puede predicar la solidaridad.

Expuso que las similitudes en las respuestas de los señores Luis Fernando palacio Moreno, Edwin Rentería palacios, Francisco Palacio Moreno no son por el

conocimiento que tienen de la relación contractual, sino que, el señor Luis Fernando Palacio Moreno tiene un parentesco con el demandante y un proceso igual al de marras, los testimonios son cuadriculados, iguales, y extraídos de la información de la demanda, y al no existir relación directa entre el demandante y la accionada CENTRO SUR S.A.S. no se puede predicar la solidaridad.

Se opuso a los valores condenados en sentencia y más aún a la sanción del artículo 65 del C.S.T. bajo el argumento que la empresa debió ser diligente en la supervisión de la construcción de una obra de dicha envergadura, pues ello, no desvirtúa la presunción de buena del artículo 83 de la Constitución Nacional. Se opuso a la condena en costas, pues indica que su prohilada no ha faltado a su deber contractual con el señor César Emilio, y en el caso que sea confirmada la sentencia, solicitó la revocatoria de la sanción del artículo 65 del C.S.T. al no probarse la mala fe, y citó la sentencia 37288 reiterando que Centro Sur SAS siempre obró de buena fe.

Corrido el traslado para alegar, la apelante expuso que no existió responsabilidad solidaria del contratante por concepto de prestaciones sociales, salariales e indemnizaciones, pues CENTRO SUR S.A. se dedica a actividades inmobiliarias de venta de propiedad, las que no incluyen las actividades de excavación de pilas de fundación ni, en general, ninguna labor de construcción, puesto que, al ser labores especializadas, se contrata su realización con entidades externas, justamente porque no se trata de una actividad que normalmente ejecute la empresa. Resalta que la empresa tiene como objeto principal, la venta de propiedad horizontal, como quedó probado con la declaración del representante legal de la compañía, quien afirmó que, desde hace varios años, al no tener conocimiento técnico en las actividades constructivas, dichas labores se contratan con terceros técnicos en las mismas; siendo que CENTRO SUR S.A. se dedica a la comercialización de propiedad inmobiliaria, más no a la construcción de la misma, por lo que no puede predicarse la solidaridad del artículo 34 del C.S.T.

Expuso, que hubo una indebida valoración probatoria, pues se dijo que se encontraba probado aspectos tales como la subordinación, cumplimiento de

órdenes por parte del demandante frente a supuestas instrucciones impartidas por los maestros de obra y representantes de CENTRO SUR S.A., y en general, elementos de una presunta relación entre el objeto social de mi poderdante y las actividades desarrolladas por el contratista, señor César Emilio Córdoba Palacios, pese a que la prueba ofrecida por la parte demandante, ofreció serias dudas frente a la credibilidad e imparcialidad que requiere un testimonio veraz, dejándose ver indicios a favor de su prohiada y tampoco se impartieron las consecuencias procesales por la inasistencia del demandante al interrogatorio de parte.

Insistió en la ausencia de mala fe de su prohiada, e indicó que hubo buena fe respecto a ésta en el desarrollo de la relación contractual y que tampoco puede derivarse mala fe respecto al propio empleador pues citó que sus propios recursos económicos se agotaron de cara a responder por las obligaciones laborales de sus trabajadores, viendo en peligro su vida por tratar de encontrar capital para solventar las obligaciones en las que faltó a sus colaboradores, quedando desvirtuada la mala fe.

La parte demandante, enunció en sus alegaciones que, la jurisprudencia ha reiterado que la buena o mala fe del contratista es la que debe analizarse para imponer la sanción moratoria por falta de pago, y no la del obligado solidario, pues este último se equipara al empleador para efectos de la sanción mencionada y por ello, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad. Respecto a la solidaridad deprecada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, se probó el nexo de causalidad entre el objeto social de las codemandadas. Por ende, solicita se confirme la sentencia objeto de recurso.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, en atención al recurso interpuesto, si existió o no solidaridad entre la empresa Centro Sur S.A. y el demandado César Emilio Córdoba Palacios, respecto a las obligaciones laborales de éste último con el señor Yuri Jhacson Tello Palacios, si es procedente o no la condena impuesta respecto a

las prestaciones sociales y salario solicitadas, y si existe o no mérito para la sanción del artículo 65 del CST.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es, así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo; y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga probatoria al demandado cuando **éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.** (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

La parte demandante no puede limitarse a enunciar de carácter asertivo lo pretendido, solicitando se active el principio de la carga dinámica de la prueba, pues ello, ocurre de acuerdo a la particularidad de cada proceso, en los que, ante la dificultad de la prueba, es posible la inversión de dicha carga a favor del extremo activo, imponiendo a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos que amparen los fundamentos fácticos enunciados. A pesar de ello, no se deja de lado que en un principio es el demandante y no otro, quien sobre sus hombros debe traer al proceso los elementos probatorios que, calificados en conjunto por el fallador, arriben a la concesión de sus pretensiones, para que, de ser el caso, su contra parte, si posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, debatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.

Explicado lo anterior, debe decirse, que de la manera en que se enlazó el litigio por la parte accionante, narró que lo vinculó con el señor César Emilio Córdoba Palacios una relación laboral, y que éste último, era contratista de la empresa Centro Sur SA.

A dicho hecho, el señor César Emilio Córdoba Palacios contestó en el escrito de demanda que si bien no era cierta la modalidad del contrato, si lo unió con el demandante un contrato de trabajo por obra o labor determinada, es decir, el empleador en su libelo responsorial aceptó la existencia de la relación laboral, y los extremos de la misma, oponiéndose tan sólo en la modalidad del contrato respecto a su duración pues el actor insistió en ser a término indefinido y el demandado por obra o labor determinada.

Así las cosas, excluido del debate probatorio se encuentran los hechos que fueron aceptados por el extremo pasivo al cual se le endilgan, pues el demandante no solicitó la existencia de una relación laboral con Centro Sur SA sino la figura de la solidaridad frente a éste, pero si, la declaratoria de la relación laboral con el señor César Emilio Córdoba, quien como se insiste, aceptó la misma e incluso, indicó que su capacidad de pago respecto a las obligaciones con sus empleados entre esas el demandante, se encontraba comprometida ante sus menguados recursos

económicos, quedando, objeto de debate, el despido, el salario, la modalidad contractual respecto a la duración del contrato y la solidaridad.

Es así, como no tenía que probarse la existencia de la relación laboral contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, pues el elemento probatorio pierde su fin cuando se acepta el hecho que se pretende acreditar, y en atención a que funda su oposición a las condenas de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, indemnización por despido injusto y salarios en la inexistencia de relación directa entre el demandante y Centro Sur, debe explicarse que la sentencia de primera instancia fue suficientemente clara al expresar, que la obligación de pago de la demandada Centro Sur SA nace no por relación directa como lo dice la recurrente, sino, en atención al Artículo 34 del C.S.T.

Ahora, la solidaridad tiene 3 fuentes, la Ley, el contrato y el testamento. En el caso de autos, quedó aceptado por la demandada Centro Sur SA que lo unía con el señor César Emilio Córdoba Palacios, un contrato de obra de excavación de pilas y actividades conexas, las cuales se desarrollaron en tres proyectos, uno de ellos, Polaris Cielo Sur en el cual se aceptó la prestación del servicio del actor.

Sobre la solidaridad, el artículo 34 del CST reza:

“1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”.

El alcance de ésta disposición advierte que la solidaridad del beneficiario de la obra realizada por el trabajador no se presenta automáticamente, o en todos los eventos, sino exclusivamente cuando las labores desempeñadas por el trabajador no sean ajenas al giro ordinario de sus negocios. La excepción a la solidaridad, es decir, cuando las labores son ajenas al giro ordinario de los negocios del beneficiario de la obra, fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en la sentencia C - 593 de 2014, en donde se reflexionó:

Se observa entonces que la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, dentro del marco de sus competencias, han aplicado e interpretado la figura de la solidaridad laboral prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. A partir de ella, se ha impuesto límites al uso irregular de la contratación independiente, imponiendo el pago compartido tanto del contratista independiente como de la empresa que se beneficia de la labor. De igual manera, como criterio de distinción entre el uso legítimo y constitucionalmente válido de la tercerización y aquél uso irregular y vulneratorio de los derechos de los trabajadores, se encuentra la determinación si el empleado realiza funciones propias del giro ordinario de la empresa o entidad. Esto último, teniendo en consideración el concepto amplio que ha sido acogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que para que proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar que no son labores extrañas al desarrollo de la empresa.

Es por ello que la distinción hecha por la disposición entre aquellos trabajadores del contratista que desarrollen funciones normales y ordinarias de la empresa contratante y aquellas ajenas a la misma, tiene su fundamento en el objeto y fin del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, evitar que la referida empresa utilice la llamada tercerización para evadir las obligaciones laborales y esconda verdaderos contratos realidad para desarrollar las funciones o labores que le son propias para cumplir su objeto social.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral también ha interpretado los alcances de ésta norma, indicando en las sentencias de radicación 38.651 de 2014, 49.730 de 2016 y SL 715 de 2019 que el presupuesto de la solidaridad es la **afinidad** en las actividades desplegadas por el contratista independiente y por el beneficiario, precisando que aun cuando no se exige identidad, si debe existir co-relación entre las actividades.

En el contexto de la subcontratación, aclaró la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 3198 de 2019, que el contratista, es un verdadero beneficiario de las labores desempeñadas por el trabajador a través del sub contratista, así:

“En segundo lugar, resulta imperativo recordarle al censor que la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del CST no se predica únicamente del beneficiario directo o dueño de la obra, sino también del contratista independiente y del subcontratista, como quiera que éstos deben ser mirados, asimismo, como beneficiarios de los servicios prestados por el trabajador, así sea de manera indirecta, dado el carácter tuitivo o proteccionista del derecho laboral, razón por la cual también se torna intrascendente el hecho de que el Tribunal no hubiera efectuado expresamente un análisis tendiente a verificar si Vicon S.A. era la beneficiaria de las labores desarrolladas por el trabajador fallecido.

Frente al tema, en sentencia CSJ SL, 27 oct. 1989, rad. 3321, reiterada en la CSL SL869-2019, rad. 56394, esta Sala adoctrinó:

“La acusación que se le hace al ad-quem de interpretar con error el Artículo 3º del Decreto 2351 165, que modificó al 34 del CS T., se hace consistir en que tal precepto sólo hace solidariamente responsable de los derechos laborales del trabajador al dueño de la obra y al contratista o a aquél y el sub-contratista, mas no al contratista y al subcontratista.

La Sala se permite observar que el Tribunal no equivocó la inteligencia de dicha norma cuando dedujo responsabilidad solidaria del contratista y subcontratista demandados porque analizada detenidamente esa normatividad y desentrañando su espíritu, es neCésario

concluir que para eventos como el aquí ocurrido, el contratista debe ser mirado, pues realmente lo es, como un beneficiario de los servicios prestados por el trabajador a través del subcontratista ya que no debe perderse de vista el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral; por consiguiente. lo que se predique del contrato entre el dueño de la obra y el beneficiario del trabajo o de la prestación del servicio, en este caso A. l. C. LTDA., no puede perjudicar al trabajador del subcontratista, pues frente a aquél, se repite, el contratista tiene que ser considerado como beneficiario del servicio personal que presta el trabajador como que a la postre se aprovecha, aunque sea indirectamente, de la labor ejecutada por el trabajador, máxime, como se desprende del infolio, la actividad normal de A. l. C. Ltda. pertenece a las normales del codemandado José Darío Mora T aborda. (subrayado fuera de texto)”.

El *a quo* determinó que siendo el objeto de la contratación entre el señor César Emilio Córdoba Palacios y Yuri Jhacson Tello Palacios las pilas necesarias para en asentamiento de la obra, construida por Centro Sur SA, ante la afinidad de la labor, y la co-relación entre ésta, se considera Solidariamente responsable a Centro Sur SA, conclusión coherente con los presupuestos citados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sumado a, que en el objeto social de dicha empresa se encuentra **“Intervenir en la construcción de proyectos inmobiliarios en general, cualquiera que sea la destinación de los inmuebles, con la finalidad de enajenar a título oneroso los respectivos proyectos...celebrar contratos relacionados con la construcción”**, siendo indiscutible que la construcción estuviera inmersa en su objeto social, y la celebración de contratos para dicha ejecución, por lo que, indudablemente, le asistió razón al juzgador de primera instancia al declarar la responsabilidad solidaria.

Respecto a la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., la Sala Laboral ha precisado, que la imposición de esta, no tienen aplicación automática, pues **la buena fe demostrada del empleador** es suficiente para eximir de ello.

Igualmente, en sentencia SL 194 de 2019, refirió que **es el empleador** quien finalmente tiene la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, lo cual,

había sido objeto de pronunciamiento en sentencia de radicación N° 32.416 de 2010 y en la SL 11436 de 2016, cuando refirió:

“Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.”

No basta pues, que el demandado enuncie su precaria situación económica para que, tenga como probada su buena fe, pues las obligaciones laborales hacen parte de un derecho preferente y proteccionista en el cual debe garantizarse al trabajador el lleno de las garantías y derechos dados por el legislador, sin que se pueda simplemente excusar al empleador que expone su precariedad económica para ello, sin pruebas que acrediten sus dichos.

Ahora, como obligado solidario, en lo que a la indemnización moratoria refiere, el artículo 34 del CST extendió la solidaridad a las indemnizaciones laborales, incluyendo la moratoria, como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencias como la SL 1406 de 2022, así:

“De una lectura del artículo 34 del CST, se colige que la solidaridad que emana de la ley, traduce al responsable solidario como un garante de las obligaciones que resulten a cargo del empleador, por lo que la conducta que se examina en aras de determinar la procedencia de la indemnización moratoria, es la del empleador directo, que, en este caso fue objeto de estudio en sede extraordinaria encontrándose un actuar del empleador desprovisto de buena fe, por lo que no resulta relevante analizar la buena o mala fe del Municipio, pues frente al marco jurídico resulta intrascendente, toda vez que, se insiste, el ente territorial

responde, no por haber actuado de mala fe, sino por el fenómeno de la solidaridad, la cual no fue cuestionada en casación.

Para ello es necesario recordar que la figura de la solidaridad fue instituida en la normatividad laboral, con el objeto de garantizar el pago de las acreencias laborales de los trabajadores en los casos que se presentan tercerizaciones, para que, los beneficiarios o dueños principales de las obras funjan como garantes del pago de las prestaciones que resulten a favor de los trabajadores.”

Conforme a ello, se confirmará la condena impuesta.

Empero, al haber sido llamado a juicio la pasiva Centro Sur S.A. no por sus propias omisiones de carácter legal sino, como responsable solidario de aquellas en las que incurrió el contratista, se revocará la sentencia de primera instancia respecto a las costas procesales

Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la decisión proferida en primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar la condena de costas y agencias en derecho a cargo de la demandada Centro Sur SA.

SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Laboral de Envigado el diez (10) de marzo del año dos mil diecisiete (2017)

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>